



Poder Judicial de la Nación

CÁMARA FEDERAL DE CASACIÓN PENAL - SALA 4
FMZ 49491/2018/TO1/1/CFC1

REGISTRO NRO. 384/26.4

En Buenos Aires, a los 7 días del mes de mayo de 2026, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por el doctor Javier Carbajo como presidente y los doctores Gustavo M. Hornos y Mariano Hernán Borinsky, asistidos por el secretario actuante, a los efectos de decidir acerca del recurso de casación interpuesto en la presente causa Nro. **FMZ 49491/2018/TO1/1/CFC1** caratulada: "**LETA, Daniel Rubén s/recurso de casación**", de la que **RESULTA:**

I. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mendoza Nro. 1, el 19 de diciembre de 2025, resolvió: "*NO HACER LUGAR al pedido de sobreseimiento efectuado por la defensa técnica de Daniel Leta*".

II. Contra esa decisión, la defensa particular de Daniel Rubén Leta interpuso recurso de casación, el que fue concedido por el *a quo* el 12 de febrero del corriente año.

III. El recurrente sostiene que la resolución impugnada no satisface las exigencias de fundamentación previstas en el artículo 123 del Código Procesal Penal de la Nación, configurando el motivo casatorio contemplado en el artículo 456, inciso 2°, del mismo ordenamiento.

En tal sentido, afirma que el tribunal se limitó a reproducir los informes remitidos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), sin efectuar un análisis crítico de su contenido ni confrontarlos con la prueba documental aportada por la defensa, omitiendo exponer las razones por las cuales otorgó prevalencia a dicha información por sobre los elementos probatorios incorporados



por su parte.

Señala que el decisorio tuvo por acreditada la subsistencia de deuda con base exclusiva en informes administrativos que califican determinadas obligaciones como "impagas", sin considerar los comprobantes de pago acompañados, las constancias de cancelación de cuotas del plan de facilidades previsto en la Ley 27.743 y las comunicaciones del estudio jurídico interviniente en la cobranza fiscal, que, según refiere, daban cuenta del cumplimiento del régimen de regularización excepcional.

Asimismo, sostiene que existía una contradicción entre la información proporcionada por ARCA y la documentación presentada por la defensa, frente a la cual el tribunal optó por una de las versiones sin explicitar los criterios de valoración empleados.

Aduce, además, que el tribunal incurrió en una omisión relevante al afirmar que no se habían registrado presentaciones posteriores al dictamen fiscal, cuando —según refiere— la defensa había contestado expresamente dicho informe, acompañado documentación adicional y solicitado la verificación directa de la información con el estudio jurídico actuante.

En ese marco, manifiesta que no fueron considerados los argumentos ni la prueba incorporados en esa oportunidad, lo que, a su criterio, afectó el principio de contradicción y el derecho de defensa.

Por otra parte, expone que, ante la existencia de versiones contrapuestas respecto del estado de la deuda, el tribunal no dispuso medidas de prueba tendientes a esclarecer





Poder Judicial de la Nación

CÁMARA FEDERAL DE CASACIÓN PENAL - SALA 4
FMZ 49491/2018/TO1/1/CFC1

la cuestión, tales como requerimientos ampliatorios, verificaciones directas o una pericia contable, pese a encontrarse habilitado para ello conforme el artículo 357 del Código Procesal Penal de la Nación.

En relación con el fondo del planteo, afirma que su asistido se acogió al régimen de regularización excepcional previsto en la Ley 27.743 y cumplió con el plan de pagos correspondiente, por lo que se encontrarían reunidos los presupuestos legales para declarar la extinción de la acción penal, circunstancia que –según sostiene– no fue debidamente valorada en la resolución recurrida.

Finalmente, señala que el rechazo del pedido de sobreseimiento le ocasiona un gravamen irreparable, en tanto mantiene vigente la persecución penal pese a la presunta cancelación de la deuda, afectando el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, el derecho a la libertad personal y el principio de seguridad jurídica, razón por la cual considera que el pronunciamiento resulta equiparable a sentencia definitiva a los fines recursivos.

Con base en tales agravios, invoca la vulneración de los derechos y garantías reconocidos en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En función de los agravios expuestos, el recurrente solicita que esta cámara revoque la resolución impugnada por considerar que carece de fundamentación suficiente y que se encuentra afectada por vicios de arbitrariedad, y que, en consecuencia, se disponga el dictado de un nuevo pronunciamiento ajustado a la totalidad de las constancias



probatorias incorporadas al proceso.

Subsidiariamente, peticiona que se declare la extinción de la acción penal en los términos del artículo 5 de la Ley 27.743 y se dicte el sobreseimiento de su asistido.

Hizo reserva del caso federal.

IV. En la oportunidad prevista en los arts. 465 *bis* en función de los artículos 454 y 455 del C.P.P.N. -según ley 26.374-, la defensa técnica de Daniel Rubén Leta, presentó breves notas en las que reiteró que el pronunciamiento impugnado constituye un acto jurisdiccional arbitrario por carecer de la debida fundamentación exigida por el artículo 123 del C.P.P.N., en tanto el tribunal se habría limitado a receptar sin verificación propia la información suministrada por ARCA respecto de la subsistencia de deuda fiscal pendiente.

En esa línea, alegó que el tribunal tuvo por acreditado -sobre la base de informes del organismo recaudador - que las obligaciones tributarias objeto de la denuncia penal no habían sido regularizadas ni incluidas en los planes de facilidades previstos en la ley 27.743, pese a que, según afirmó, la defensa había acompañado constancias que demostrarían la cancelación total de la deuda mediante pagos efectuados ante el estudio jurídico Montepeluso, apoderado recaudador de ARCA. Argumentó que existió un error en la individualización de las deudas informadas al organismo fiscal y que el tribunal omitió ponderar tanto los comprobantes de pago acompañados como los correos electrónicos remitidos por el referido estudio jurídico, de los cuales -según sostuvo-





Poder Judicial de la Nación

CÁMARA FEDERAL DE CASACIÓN PENAL - SALA 4
FMZ 49491/2018/TO1/1/CFC1

surgiría la vigencia y cumplimiento del plan de regularización.

Asimismo, la defensa cuestionó que la resolución recurrida afirmara que no se habían registrado presentaciones posteriores a la vista conferida al Ministerio Público Fiscal, pues señaló que sí había contestado el informe de ARCA mediante un escrito en el cual impugnó la veracidad de los datos suministrados por el organismo recaudador, acompañó nueva documentación y solicitó que el tribunal profundizara la investigación sobre el estado de cancelación de la deuda. Afirmó que dicha presentación no fue considerada al resolver y que ello evidenciaría una indebida valoración probatoria y una afectación del principio de contradicción.

Por otra parte, sostuvo que, frente a la divergencia entre la documentación aportada por la defensa y la información emanada de ARCA, el tribunal oral debió ordenar medidas de prueba complementarias —como una pericia contable o informes adicionales— en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 357 del C.P.P.N., a fin de verificar objetivamente la cancelación de la deuda y evitar un apartamiento arbitrario de la solución legal prevista en la ley 27.743. Sobre esa base, postuló que el tribunal perdió la necesaria equidistancia entre las partes al otorgar prevalencia automática a los informes estatales pese a las contradicciones señaladas por la defensa.

Finalmente, solicitó que se haga lugar al recurso de casación, se revoque el auto recurrido y se remitan las actuaciones para el dictado de un nuevo pronunciamiento que contemple integralmente la prueba incorporada y adopte las



medidas necesarias para esclarecer la efectiva cancelación de la deuda fiscal y la eventual procedencia de la extinción de la acción penal. Asimismo, efectuó reserva del caso federal.

V. Que superada dicha etapa procesal, quedaron las actuaciones en estado de ser resueltas y practicado el sorteo de estilo para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctores Gustavo M. Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Javier Carbajo.

El **señor juez Gustavo M. Hornos** dijo:

I. De inicio, cabe memorar que conforme surge del requerimiento fiscal de elevación a juicio del 16 de junio de 2022, Daniel Rubén Leta se encuentra requerido a juicio por resultar *prima facie* autor del delito de insolvencia fiscal fraudulenta (art. 9 del Régimen Penal Tributario y 45 del C.P.).

En lo que resulta ahora pertinente, el tribunal de la anterior instancia resolvió rechazar el planteo de extinción de la acción penal formulado por la defensa del encausado, que se había sustentado en el presunto cumplimiento del plan de facilidades de pago previsto en la Ley 27.743 con relación a las deudas que motivaron la denuncia penal.

Valoró para ello que el Ministerio Público Fiscal requirió la remisión de un nuevo oficio a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) con copia de toda la documentación presentada por el imputado, a fin de que informara acerca de la procedencia del acogimiento del imputado al régimen de regularización excepcional, el monto adeudado en relación con el hecho investigado y el eventual cumplimiento o cancelación de planes de facilidades de pago.





Poder Judicial de la Nación

CÁMARA FEDERAL DE CASACIÓN PENAL - SALA 4
FMZ 49491/2018/TO1/1/CFC1

El tribunal destacó que, en respuesta a dicho requerimiento, la Sección Penal Tributaria de ARCA-DGI informó que subsistía deuda pendiente de cancelación por parte de la firma vinculada al imputado, conforme a la información remitida por la Sección Cobranza Judicial.

Asimismo, consignó que, con relación a la denominada "deuda en gestión administrativa", ARCA indicó que la misma se encontraba totalmente impaga a la fecha del informe, y que la contribuyente NEREIDA S.A. había presentado dos planes de facilidades de pago en el marco de la Ley 27.743, uno de ellos caduco y otro cancelado, sin que en dichos planes se hubieran incluido las obligaciones correspondientes a la deuda en gestión administrativa.

Se hizo constar, además, que el organismo recaudador informó que ni la firma NEREIDA S.A. ni el Sr. Daniel Rubén Leta habían acogido las obligaciones objeto de la denuncia penal a ningún régimen de moratoria, conforme lo señalado por las áreas de Cobranza Judicial y Recaudación de la Agencia N° 1 Mendoza.

El tribunal señaló que, corrida la vista respectiva, el Ministerio Público Fiscal dictaminó que en virtud de la información proporcionada por ARCA no resultaba procedente la extinción de la acción penal en los términos del artículo 5 de la Ley 27.743.

Indicó también que, otorgada nueva intervención a la defensa técnica a fin de garantizar el principio de contradicción, no se registraron presentaciones posteriores.

Sobre esa base, el órgano jurisdiccional expresó que, analizados los argumentos de las partes a la luz de las



constancias del expediente, correspondía rechazar el pedido de sobreseimiento formulado.

En particular, precisó que, tal como ha señalado el titular de la acción penal al dictaminar, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha informado que «*UNICAMENTE la boleta de deuda N.º 630/893502/2014... es una de las tantas que conforman el monto total de "deuda en gestión judicial" denunciado en la presente causa ... si bien dicha boleta ha sido descargada por pago, aún existe deuda pendiente de cancelación por parte de la firma, conforme se verifica en la información enviada por Sección Cobranza Judicial, lo cual se adjunta a la presente (...) con relación a la "DEUDA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA" la misma se encuentra totalmente impaga a la fecha y Sección Recaudación Informó que "La contribuyente NEREIDA SA CUIT N° 30710663323 registra la presentación de 2 planes de facilidades de la ley 27.743 (T769935 Plan Caduco y T500747 Plan Cancelado)..."*. Por último, el informe agrega que "*se informa que ni la firma NEREIDA S.A, ni el Sr. LETA DANIEL RUBEN, han acogido las obligaciones objeto de la presente denuncia penal a plan de la Moratoria alguno, así lo informa tanto Sección cobranza Judicial como Sección Recaudación de Agencia N° 1 Mendoza, ARCA-DGI*»".

En efecto, entonces, valoró el tribunal que ARCA había informado que únicamente una de las boletas de deuda había sido descargada por pago, formando parte de un conjunto mayor de obligaciones que integraban la deuda en gestión judicial denunciada en la causa, y que, pese a dicha cancelación parcial, subsistía deuda pendiente de cancelación.

Asimismo, reiteró que, según el organismo recaudador,





Poder Judicial de la Nación

CÁMARA FEDERAL DE CASACIÓN PENAL - SALA 4
FMZ 49491/2018/TO1/1/CFC1

la deuda en gestión administrativa permanecía impaga y que los planes de facilidades presentados por la contribuyente no comprendían las obligaciones objeto de la denuncia penal.

Finalmente, el tribunal concluyó que, conforme a lo informado por ARCA y a lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal, no se verificaba en autos la extinción de la acción penal que habilitara el sobreseimiento solicitado, motivo por el cual resolvió no hacer lugar al planteo defensivo.

Contra esa decisión, se interpuso el recurso en estudio.

II. Reseñados los antecedentes del caso, cabe señalar que la decisión recurrida no se encuentra comprendida, en principio, entre aquellas resoluciones previstas en el art. 457 del Código Procesal Penal de la Nación, en tanto no se trata de una sentencia definitiva ni de un auto que ponga fin a la acción, a la pena o que haga imposible la continuación de las actuaciones, ni tampoco de uno que deniegue la extinción, conmutación o suspensión de la pena (cfr. Sala IV, causa nro. 2617, "PAGNOTTA, Vicente Jorge s/recurso de queja", Reg. Nro. 3294.4, rta. el 6/4/01; causa nro. 3245, "RIVADENEIRA, María Victoria s/recurso de queja", Reg. Nro. 3983.4, rta. el 22/4/02; causa nro. 3284, "DE OTO, Eduardo Nicolás s/recurso de queja", Reg. Nro. 4080.4, rta. el 30/5/02; causa nro. 3944, "ASMUNDO, Juan José s/recurso de queja", Reg. Nro. 4948.4, rta. el 6/6/03 y causa Nro. 5977, "TELLER, Valentín y otros s/recurso de queja", Reg. Nro. 7116, rta. el 30/11/05, entre otras).

En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia de la



Nación ha sostenido reiteradamente que las resoluciones cuya consecuencia es la prosecución del proceso no constituyen sentencia definitiva ni equiparable a tal a los fines de la habilitación de instancias extraordinarias (Fallos: 310:2733; 316:341; 321:2310; 321:3679; 327:2315, entre otros).

No obstante ello, la doctrina del Máximo Tribunal ha admitido, con carácter excepcional, la habilitación de instancias revisoras cuando se encuentra en juego un agravio de naturaleza federal cuya entidad excede la mera discrepancia con lo resuelto y se vincula de modo directo con garantías constitucionales de particular trascendencia (cfr. doctrina de Fallos: 328:1108 "Di Nunzio", entre otros).

Así, corresponde recordar que el recurso de casación fundado en el artículo 456, inciso 2°, del Código Procesal Penal de la Nación habilita el control sobre la observancia de las formas sustanciales del proceso y, en particular, sobre la suficiencia de la motivación del pronunciamiento impugnado.

En consecuencia, el análisis debe circunscribirse a determinar si la resolución recurrida constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas del caso.

En lo pertinente, resulta que la resolución impugnada expuso los antecedentes del planteo defensivo, reseñó el requerimiento fiscal y transcribió el contenido de los informes emitidos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

Asimismo, consignó expresa y fundadamente que, conforme a dichos informes subsistía deuda pendiente de cancelación y concluyó, con motivos suficientes, que no se





Poder Judicial de la Nación

CÁMARA FEDERAL DE CASACIÓN PENAL - SALA 4
FMZ 49491/2018/TO1/1/CFC1

verificaban los presupuestos del artículo 5 de la Ley 27.743 para declarar extinguida la acción penal.

En la decisión cuestionada se identificaron las fuentes de convicción en las que se sustentó y se expuso el razonamiento que condujo a la solución adoptada, lo que satisface el estándar mínimo de motivación exigido por el artículo 123 del CPPN. Y es en este contexto que el desacuerdo de la defensa con la conclusión alcanzada no equivale, por sí mismo, a falta de fundamentación.

En efecto, el tribunal de grado asignó relevancia a los informes emitidos por el organismo recaudador competente, los cuales fueron requeridos específicamente y con acompañamiento de las copias de la documentación postulada por la defensa con el objetivo de esclarecer el estado de la deuda vinculada al hecho investigado.

En relación a ello, se debe señalar que la información proveniente de la autoridad administrativa encargada de la determinación y percepción de las obligaciones tributarias constituye un elemento objetivo directamente vinculado con el presupuesto legal cuya verificación se pretendía; y la circunstancia de que la defensa hubiera acompañado documentación que, según su postura, acreditaría el pago o regularización de las obligaciones, no impone necesariamente al órgano jurisdiccional adoptar esa versión, ni convierte en arbitraria la decisión de otorgar prevalencia a la información institucional emitida por el organismo fiscal. De ello se extrae que no se ha acreditado un apartamiento manifiesto de las constancias del expediente, extremo que tampoco se verifica en el caso.



A su vez, y sobre la alegada omisión de tratamiento de presentaciones defensivas, es del caso destacar que en la resolución impugnada el tribunal dejó constancia de que, conferida nueva intervención a la defensa con la información recabada al ARCA y el nuevo dictamen fiscal sobre la cuestión, no se registraron presentaciones. De manera que, asegurado el contradictorio, lo determinante es que el tribunal fundó su decisión en la información técnica específica requerida al organismo recaudador -al cual se le remitió la documentación acompañada por la defensa- y en el dictamen del Ministerio Público Fiscal.

Entonces, no se advierte que la eventual omisión de referencia expresa a determinados argumentos expuestos por la parte ahora recurrente, haya privado al decisorio de sustento fáctico o jurídico, en tanto la cuestión central -esto es, la existencia o no de deuda alcanzada por el régimen de regularización- fue abordada mediante el informe del ente competente, con adecuada vista a las partes.

Sobre la falta de medidas probatorias adicionales no puede olvidarse que el artículo 357 del CPPN faculta al tribunal a disponer medidas instructorias complementarias cuando lo estime indispensable. Pero dicha facultad no se traduce en una obligación automática de producir nuevas pruebas cada vez que exista discrepancia entre las partes.

En el caso, se reitera, el tribunal contó con un informe específico emitido por el organismo fiscal que respondió concretamente a los puntos requeridos, por lo cual la decisión de no disponer otras diligencias adicionales se inscribe dentro del ámbito de discrecionalidad razonable del





Poder Judicial de la Nación

CÁMARA FEDERAL DE CASACIÓN PENAL - SALA 4
FMZ 49491/2018/TO1/1/CFC1

órgano jurisdiccional y no evidencia arbitrariedad.

En definitiva, el régimen de extinción de la acción penal previsto en el artículo 5 de la Ley 27.743 exige la verificación del acogimiento y cumplimiento de las obligaciones comprendidas en la denuncia penal. Y, conforme a la información oficial incorporada a la causa, las obligaciones objeto del proceso no habrían sido incluidas en los planes de facilidades ni canceladas en su totalidad; por lo que, en ese marco, la conclusión del tribunal -en concordancia con lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal- en cuanto a que no se encontraban reunidos los presupuestos legales para declarar extinguida la acción penal aparece fundada en los elementos objetivos incorporados al expediente.

La resolución atacada se encuentra debidamente sustentada y los agravios invocados por el impugnante evidencian una opinión diversa sobre la cuestión debatida y resuelta, que no alcanzan a rebatir las razones sustanciales que le dan apoyatura (C.S.J.N. Fallos; 302:284; 304:415), de modo que impide la descalificación de aquella como acto judicial válido (Fallos: 293:294; 299:226; 305:1103; 306:1368; 335:1779).

III. Por lo expuesto, propongo al Acuerdo rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa particular de Daniel Rubén Leta, sin costas en esta instancia (arts. 530 y 531, *in fine*, del C.P.P.N.). Y tener presente la reserva del caso federal.

El **señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky** dijo:



I. Previo a ingresar al tratamiento de la cuestión traída a estudio corresponde recordar que, conforme surge del requerimiento fiscal de elevación a juicio del 16 de junio de 2022, Daniel Rubén Leta Bernabé se encuentra requerido a juicio por resultar prima facie autor del delito de insolvencia fiscal fraudulenta (art. 9 del Régimen Penal Tributario y 45 del C.P.).

En el marco de estas actuaciones se presentó la defensa del nombrado ante el tribunal *a quo* y solicitó que se dicte el sobreseimiento de su defendido por entender que la acción penal se encuentra extinguida.

Fundó dicha posición en que, su asistido, Daniel Rubén Leta, se había adherido a la moratoria establecida por Decreto 608/2024 y artículo 24 Resolución General 5.525/2024 de ARCA. y Ley 27.743, restando abonar una sola cuota del plan suscripto.

Corrida la pertinente vista, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la realización de medidas previas a emitir su opinión respecto de la extinción solicitada.

Concretamente, requirió que *"...se oficie a Agencia de Recaudación y Control Aduanero - ARCA - para que indique: 1) si, en el presente caso, resulta procedente el acogimiento del imputado al Régimen de Regularización Excepcional previsto en la Ley 27.743; 2) indique cuál es el monto adeudado por el contribuyente en relación al delito que aquí se investiga y 3) informe si el Sr. Daniel Rubén Leta y/o la firma NEREIDA S.A, CUIT nro. 30710663323 se han acogido a algún régimen "Mis*





Poder Judicial de la Nación

CÁMARA FEDERAL DE CASACIÓN PENAL - SALA 4
FMZ 49491/2018/TO1/1/CFC1

facilidades" y si el plan ha sido cancela o resta abonar alguna cuota, en tales casos deberá detallar fecha y monto".

El 13 de febrero de 2026 la ARCA informó al tribunal que "1- a la fecha no resulta procedente la incorporación de los montos denunciados y adeudados a plan de facilidades de pago en el marco de la Ley 27743, ya que el plazo para su adhesión se encuentra finalizado. 2- Se informa que ni la firma NEREIDA S.A, ni el Sr. LETA DANIEL RUBEN han acogido las obligaciones denunciadas a plan mis facilidades alguno, estando las obligaciones denunciadas adeudadas a la fecha, conforme lo informado por Agencia Sede Mendoza".

Finalmente, el representante del Ministerio Público Fiscal consideró que -atento a lo informado por la ARCA- no resultaba procedente la extinción de la acción penal en los términos del art. 5° de la Ley 27.743.

El 19 de febrero de 2026, en consonancia con lo dictaminado por el representante del Ministerio Público Fiscal, el Tribunal Oral Federal N°1 de Mendoza rechazó el pedido de sobreseimiento efectuado por la defensa de Daniel Rubén Leta.

Para así resolver, el juez del tribunal recordó que "...tal como ha señalado el titular de la acción penal al dictaminar, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha informado que «UNICAMENTE la boleta de deuda N.º 630/893502/2014... es una de las tantas que conforman el monto total de 'deuda en gestión judicial' denunciado en la presente causa ... si bien dicha boleta ha sido descargada por pago, aún existe deuda pendiente de cancelación por parte de la firma, conforme se verifica en la información enviada por Sección



Cobranza Judicial, lo cual se adjunta a la presente (...) con relación a la 'DEUDA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA' la misma se encuentra totalmente impaga a la fecha y Sección Recaudación Informó que 'La contribuyente NEREIDA SA CUIT N° 30710663323 registra la presentación de 2 planes de facilidades de la ley 27.743 (T769935 Plan Caduco y T500747 Plan Cancelado)...'. Por último, el informe agrega que 'se informa que ni la firma NEREIDA S.A, ni el Sr. LETA DANIEL RUBEN, han acogido las obligaciones objeto de la presente denuncia penal a plan de la moratoria alguno, así lo informa tanto Sección cobranza Judicial como Moratoria alguno Sección Recaudación de Agencia N°1 Mendoza, ARCA-DGI''

El magistrado concluyó que "...acorde con lo informado por el organismo recaudador, no se verifica en autos la extinción de la acción penal que justificaría el sobreseimiento impetrado".

Contra dicha decisión, la defensa particular que asiste a Daniel Rubén Leta interpuso el recurso de casación. En primer lugar, sostuvo que el tribunal resolvió solamente con informes remitidos por ARCA, que son controvertidos notoriamente por la documentación acompañada por la defensa, lo que pone en crisis la motivación del decisorio recurrido, haciendo prevalecer la prueba (defectuosa y contradictoria con sus propias constancias de sistema digital) remitida por un organismo estatal, por sobre la que presentara la defensa.

En ese sentido, señaló que "...ante la presencia de la prueba instrumental acompañada y que acreditaba el pago y frente a la negativa de ARCA, en lugar de hacer prevalecer esta última, ante la duda, podría haber ordenado de oficio una





Poder Judicial de la Nación

CÁMARA FEDERAL DE CASACIÓN PENAL - SALA 4
FMZ 49491/2018/TO1/1/CFC1

simple pericia contable a través de peritos forenses, que permitiera tener datos objetivos. Por el contrario, lejos de mantener equidistancia, se recurrió a una decisión arbitraria que la invalida como acto jurisdiccional”.

Concluyó que el decisorio deviene arbitrario por apartarse del material probatorio ofrecido por la defensa.

Dicho recurso de casación fue concedido por el tribunal a quo y se encuentra a estudio ante esta Alzada.

II. La defensa reclama la aplicación del art. 5 de la Ley 27.743 en cuanto prevé que “...[L]a cancelación total de la deuda en las condiciones previstas en el presente régimen -de contado o mediante plan de facilidades de pago- producirá la extinción de la acción penal, en la medida que no exista sentencia firme a la fecha de cancelación...”.

Por su parte, el art. 1 del Decreto 608/2024 establece que “La cancelación de las obligaciones incluidas en el marco de lo previsto en el Régimen del Título I de la Ley N° 27.743, producirá la extinción de la acción penal -en la medida en que no exista sentencia firme a la fecha de cancelación- respecto de todos los partícipes, así como también de las personas imputadas por delitos fiscales comunes enumerados en los artículos 8°, 9°, 10, 11 y 15, inciso c), del Régimen Penal Tributario del Título IX de la Ley N° 27.430 y sus modificatorias, si dichas imputaciones se vinculan a obligaciones tributarias incluidas o canceladas bajo el presente Régimen, o que hubieran sido canceladas con anterioridad”.

III. De la reseña normativa efectuada se sigue que, para que proceda la extinción de la acción penal en los



términos del régimen especial bajo análisis resulta necesaria la cancelación total de la deuda en las condiciones del régimen.

Sin embargo, los informes remitidos por la ARCA dan cuenta de un pago parcial de la deuda individualizada en autos.

Según surge del correo electrónico de fecha 22 de septiembre de 2025 remitido por la División Jurídica de la Sección Penal Tributaria de la ARCA respecto de la firma Nereida S.A., "La contribuyente NEREIDA S.A. CUIT N°30710663323 registra la presentación de 2 planes de facilidades de la Ley 27.743 (T769935 Plan Caduco y T500747 Plan Cancelado)...En los mismos no incluyó las obligaciones indicadas en el cuadro anterior de 'Deuda en gestión administrativa'".

La referida deuda en gestión administrativa se correlaciona, en su totalidad, con la deuda en gestión administrativa que se expresara en la denuncia entablada por el organismo recaudador y por el Ministerio Público Fiscal al requerir la elevación a juicio.

Con respecto a la "Deuda en gestión judicial", la ARCA informó -mediante correo electrónico remitido por Sergio Alejandro Sánchez el 26 de agosto de 2025- que solo siete de los sendos juicios ejecutivos entablados contra Nereida S.A. se encontraban finalizados por cancelación de plan de pagos, condonación de deuda o prescripción.

De adverso a lo postulado por la defensa, las boletas de deuda N°630/8427/05/2015, 630/9153/02/2015, 630/8940/03/2016, 630/12393/02/2016, 630/7985/05/2017 y





Poder Judicial de la Nación

CÁMARA FEDERAL DE CASACIÓN PENAL - SALA 4
FMZ 49491/2018/TO1/1/CFC1

630/9886/02/2017, se encuentran impagas (cfr. informe de la ARCA de fecha 20/8/2025 y denuncia de fecha 3/7/2018 en Sistema Informático "Lex-100").

IV. Se advierte entonces que, tal como señaló el a quo en consonancia con el Ministerio Público Fiscal, no surge de las constancias de la causa la cancelación total de la deuda que habilite la solución remisoría que la defensa reclama.

La decisión cuestionada se ajusta a la normativa aplicable y a las constancias de la causa, mientras que los agravios de la parte recurrente se limitan a expresar discrepancias valorativas que, más allá de evidenciar la existencia de una fundamentación que no comparte y tampoco rebate, en modo alguno configuran un supuesto de errónea aplicación de la ley sustantiva ni un caso de arbitrariedad.

Cabe recordar que la doctrina de la arbitrariedad posee un carácter excepcional y exige, por tanto, que medie un apartamiento inequívoco de las normas que rigen el caso o una absoluta carencia de fundamentación (Fallos: 295:140, 329:2206 y sus citas, 330:133, entre otros); extremos que no se configuran en el caso.

V. Por los fundamentos que anteceden, propicio al acuerdo: I. RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la defensa de Daniel Rubén Leta Bernabé, sin costas en la instancia (C.P.P.N., arts. 530 y 531 in fine). II. TENER PRESENTE la reserva de caso federal efectuada por la parte recurrente.

El **señor juez Javier Carbajo** dijo:



En las particulares circunstancias de la causa, comparto en lo sustancial las consideraciones efectuadas por el juez doctor Mariano H. Borinsky y la solución propuesta en orden a rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa, sin costas en la instancia (arts. 530 y 531 *in fine*, CPPN), teniendo presente la reserva de caso federal formulada.

En mérito del Acuerdo que antecede, el Tribunal

RESUELVE:

I. RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la defensa particular de Daniel Rubén Leta, sin costas en la instancia (arts. 530 y 531, *in fine*, del C.P.P.N.).

II. TENER PRESENTE la reserva del caso federal.

Regístrese, notifíquese y remítase la causa al tribunal de origen mediante pase digital, sirviendo la presente de atenta nota de envío.

Firmado: Javier Carbaño, Gustavo M. Hornos y Mariano Hernán Borinsky.

Ante mí: Mariano González. Prosecretario de Cámara.

